

PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR

EXPEDIENTE: CQD/Q/CG/007/2019

DENUNCIANTE: ITE (OFICIOSO)

DENUNCIADO: PARTIDO SOCIALISTA

RESOLUCIÓN DICTADA POR EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES, DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR CQD/Q/CG/007/2019.

ANTECEDENTES

I. Escrito inicial. Mediante oficios **DPayF-424/2019** e **ITE-DPayF-426/2019**, de fechas doce y quince de julio¹, respectivamente, la C.P. Janeth Miriam Romano Torres, Directora de Prerrogativas, Administración y Fiscalización (**DPPayF**) del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (**ITE**), remitió al Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (**UTCE**) del **ITE**, copia simple de los diversos **ITE-PCG-218/2018** e **ITE-PCG-245/2019**, y anexos respectivos, relativos a las **vistas ordenadas** por el Instituto Nacional Electoral (**INE**) en las resoluciones **INE/CG54/2019**, **INE/CG55/2019**, **INE/CG56/2019**, **INE/CG57/2019**, **INE/CG59/2019**, **INE/CG61/2019** e **INE/CG63/2019**, referentes a las irregularidades encontradas en los Dictámenes Consolidados de la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos que presentan los partidos políticos nacionales con acreditación local, y los partidos políticos con registro local, correspondientes al ejercicio 2017.

II. Turno. Con fecha quince de julio el Titular de la **UTCE**, dio cuenta a los integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncias (**CQyD**) del **ITE**, con los oficios **ITE-DPayF-424/2019** e **ITE-DPayF-426/2019**, y anexos descritos, para los efectos legales correspondientes.

III. Radicación del cuaderno de antecedentes. El dieciséis de julio, los integrantes de la **CQyD**, radicaron el cuaderno de antecedentes **CQD/CA/CG/001/2019**, con el fin de allegarse de los elementos necesarios para establecer si existían indicios suficientes que hicieran presumir la probable transgresión a la normativa electoral por parte del Partido Socialista (**PS**), consistente en la omisión de editar y distribuir por lo menos una publicación trimestral de divulgación, y otra semestral de carácter teórico y de formación política, y de ser así, aperturar el procedimiento sancionador atinente. Para tal efecto, se requirió a la Titular de la **DPPayF** del **ITE**, así como al Secretario del Consejo General del **INE**, la documentación que se dejó precisada en el referido acuerdo.

IV. Integración de la Comisión. Toda vez que el periodo de vigencia de la **CQyD**, aprobado mediante acuerdo **ITE-CG 76/2017**, concluyó el once de octubre, resultó necesario designar

¹ Salvo mención expresa, los actos y hechos que se mencionan en la presente resolución, deben entenderse acontecidos en el año **dos mil diecinueve**.

a la Consejera y Consejeros que la integrarían por un periodo similar de dos años, razón por la cual mediante Acuerdo ITE-CG 33/2019, el Consejo General (**CG**) del **ITE** aprobó la integración de la Comisión de Quejas y Denuncias para los fines y atribuciones del Instituto, quedando conformada de la siguiente manera:

Presidente: Consejero Electoral Juan Carlos Minor Márquez.

Vocales: 1) Consejera Electoral Denisse Hernández Blas.
2) Consejero Electoral Edgar Alfonso Aldave Aguilar.

V. Recepción de documentos. Por acuerdo de veinticinco de octubre la **CQyD**, tuvo por presente a la C. P. Janeth Miriam Romano Torres, Titular de la **DPPAyF**, con el oficio **ITE-DPAyF-530-2019 y anexo**, informando que según los datos obtenidos del Programa de Seguimiento a Sanciones y Remanentes del **INE**, las resoluciones identificadas con las claves **INE/CG54/2019, INE/CG55/2019, INE/CG56/2019, INE/CG57/2019, INE/CG59/2019, INE/CG61/2019 e INE/CG63/2019**, referentes a las irregularidades encontradas en los Dictámenes Consolidados de la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos que presentan los partidos políticos nacionales con acreditación local, y los partidos políticos con registro local, correspondientes al ejercicio 2017, **se encontraban firmes**. De igual forma, con el oficio **INE-UTVOPL/3375/2019**, se tuvo por presente al Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo, Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismo Públicos Locales del **INE**, remitiendo el diverso **INE/UTF/DA/10370/19**, signado por el Lic. Carlos Alberto Morales Domínguez, Encargado de Despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización del **INE**, a través del cual envió un CD óptico certificado de la documentación que se localizó en los archivos del Sistema Integral de Fiscalización, el cual contiene por lo que respecta al presente asunto, la carpeta electrónica: 10_PS_TLX, y esta a su vez, las diversas:

- a) Carpeta “Oficios 1era y 2da vuelta”;
- b) Carpeta “Respuestas 1era y 2da vuelta”;
- c) Carpeta “Dictamen”; y
- d) Su correspondiente archivo en formato Excel, denominado “Balanza catálogos 2017”.

En consecuencia, se tuvo por cumplimentado el requerimiento formulado mediante acuerdo de fecha dieciséis de julio.

Finalmente, una vez concluidas las diligencias de investigación ordenadas y dado que de las constancias antes descritas, se desprendió la existencia de indicios suficientes que hicieron presumir la probable transgresión a la normativa electoral, por parte del **PS**, consistente en *“la omisión de editar y distribuir por lo menos una publicación trimestral de divulgación, y otra semestral de carácter teórico y de formación política”*, se estimó procedente **aperturar de oficio el procedimiento sancionador** atinente.

VI. Inicio del procedimiento y emplazamiento. Mediante proveído de fecha treinta de octubre, la **CQyD** dio inicio al **procedimiento ordinario sancionador** en que se actúa, asignándole la nomenclatura **CQD/Q/CG/007/2019**, y ordenando **emplazar** al denunciado **PS**, por conducto de sus respectivos representantes ante el **CG**, **corriéndole traslado con copia certificada** de todas y cada una de las constancias y anexos que integraban el expediente, para hacer de conocimiento los hechos que le fueron imputados, concediéndole un plazo de **cinco días hábiles** contados a partir de la legal notificación del acuerdo para que **diera respuesta y ofreciera pruebas** en relación a las imputaciones formuladas.

VII. Contestación, pruebas y requerimiento. Por acuerdo de dos de diciembre, se tuvo por presente al denunciado **PS**, dando contestación a los hechos que le fueron imputados en el presente asunto, así como ofreciendo pruebas en los términos precisados en su escrito de cuenta, las cuales se tuvo por **admitidas** y desahogadas dada su propia y especial naturaleza, asimismo, se le requirió para que dentro del término de tres días hábiles, remitiera la información que se dejó precisada en el referido acuerdo, apercibido que en caso de no dar cumplimiento, se resolvería con los elementos que obran en autos.

VIII. Cumplimiento a requerimiento y alegatos. A través de proveído de siete de enero de dos mil veinte, se tuvo por presente al denunciado **PS**, desahogando en tiempo y forma, el requerimiento formulado mediante proveído de fecha dos de diciembre, informando al efecto la forma o el método de distribución de los dos materiales que señala fueron editados y distribuidos en ese instituto político local, uno de manera trimestral y otro de manera semestral. En ese orden, considerando que tanto las probanzas ofrecidas durante la secuela procesal por el denunciado, como aquellas recabadas por la autoridad sustanciadora, fueron desahogadas dada su propia y especial naturaleza, al no existir diligencias pendientes por practicar se ordenó poner los **autos a la vista** del denunciado, para que dentro del término de **cinco días hábiles** manifestara por escrito en vía de **alegatos**, lo que a su derecho conviniera.

IX. Cierre de instrucción. Una vez sustanciado debidamente el procedimiento administrativo sancionador en que se actúa, por acuerdo de diecisiete de enero de dos mil veinte, se tuvo por presente al **PS** formulando alegatos en el presente asunto, se declaró cerrada la instrucción y se instruyó al titular de la **UTCE**, procediera a formular el proyecto de resolución correspondiente, para ser sometido al conocimiento y aprobación de la **CQyD**.

X. Ampliación de término de resolución. Vista la carga de trabajo y la carencia de personal adscrito a la **UTCE**, mediante proveído de treinta y uno de enero de dos mil veinte, la **CQyD** determinó ampliar por diez días, el término para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente a los procedimientos sancionadores **CQD/Q/CG/001/2019**, **CQD/Q/CG/002/2019**, **CQD/Q/CG/003/2019**, **CQD/Q/CG/004/2019**, **CQD/Q/CG/005/2019**, **CQD/Q/CG/006/2019** y **CQD/Q/CG/007/2019**.

XI. Sesión de la CQyD. En Sesión extraordinaria, celebrada el catorce de febrero de dos mil veinte, la **CQyD** analizó, discutió y aprobó por unanimidad de votos de sus integrantes, el proyecto de resolución propuesto en el presente asunto.

XII. Remisión del proyecto de resolución. A través de oficio **ITE-CQyD/JCMM/05/2020**, de fecha veintiuno de febrero de dos mil veinte, el Presidente de la **CQyD** remitió el proyecto de resolución a la Consejera Presidenta del **ITE**, a fin de que lo sometiera a la consideración del pleno del **CG**.

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. COMPETENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 116, fracción IV, incisos b), c) y o) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos², en relación con los artículos 98, párrafos 1 y 2, y 104, párrafo 1, inciso a), de la Ley General

² En lo sucesivo Constitución.

de Instituciones y Procedimientos Electorales; 95 de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala³; 5, 19, 20, 21 y 25 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala⁴, el ejercicio de la función electoral del Estado se encomienda al Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, organismo público autónomo y autoridad competente en la materia.

En este sentido, el **CG** del **ITE**, es competente para conocer y resolver sobre el presente Procedimiento Ordinario Sancionador, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 14, 16, 17, 41 base V apartado C de la Constitución; 95 de la Constitución Local; 1, 2, 19, 20, 25, 51 fracciones I, II, III, XIX, LI, 345 fracción I, 346 fracciones I, XIV, y XVII, 366, 372 al 381 de la LIPEET; 52, fracción X, y 87 apartado C, fracción I, de la Ley de Partidos Políticos para el Estado de Tlaxcala⁵; 1, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15 al 21, 41 al 51 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones; y, 8 del Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones.

Toda vez que el origen del presente procedimiento **oficioso** fue la **vista ordenada** por el **INE** en la resolución **INE/CG63/2019**, siendo atribución del **CG** vigilar el cumplimiento de todo lo relativo a las prerrogativas, derechos, obligaciones y prohibiciones de los partidos políticos, y por tanto, ser el encargado de imponer las sanciones derivadas de su inobservancia.

SEGUNDO. ESTUDIO DE FONDO.

1. Precisión de los hechos y conducta denunciada. Del análisis realizado a la resolución **INE/CG63/2019**, así como del contenido de la carpeta 10_PS_TLX, misma que contiene la documentación relacionada con la conclusión 10-C2-TL, se desprende lo siguiente:

- a) La **conducta denunciada** deriva de lo previsto por el artículo 52, fracción X, de la LPPET, el cual señala que es *obligación de los partidos políticos editar y distribuir por lo menos una publicación trimestral de divulgación, y otra semestral de carácter teórico y de formación política.*
- b) Al respecto, el **INE** señaló tanto en el dictamen consolidado como en la resolución **INE/CG63/2019**, con la cual se dio vista a la **CQyD**, lo siguiente:

“d) Vista al Organismo Público Local Electoral: Conclusión 10-C2-TL.

No.	Conclusión
10-C2-TL	<i>“El sujeto obligado no cumplió con la obligación de editar por lo menos una publicación semestral de carácter teórico y una trimestral de divulgación.”</i>

I. ANÁLISIS TEMÁTICO DE LA OBSERVACIÓN REPORTADA EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO.

Actividades Específicas

De la verificación a la cuenta “Tareas Editoriales” se observó que el sujeto obligado no cumplió con la obligación de editar por lo menos una publicación semestral de carácter teórico y una trimestral de divulgación.

³ En lo subsecuente Constitución Local.

⁴ En lo sucesivo LIPEET.

⁵ En lo sucesivo LPPET.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, mediante oficio INE/UTF/DA/44779/18 notificado el 19 de octubre de 2018, se hicieron de su conocimiento los errores y omisiones que se determinaron de la revisión de los registros realizados en el SIF.

Si bien el sujeto obligado presentó escrito de respuesta, respecto a esta observación no presentó documentación o aclaración alguna.

No obstante, derivado del análisis al SIF, se constató que no presentó documentación que indique que el sujeto obligado cumpliera con la obligación de editar las publicaciones descritas.

Por lo anterior, mediante oficio INE/UTF/DA/47096/2018 se le solicitó presentara nuevamente en el SIF:

- Las aclaraciones que a su derecho convinieran.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25, numeral 1, inciso h), de la LGPP; 37, numeral 3; 185, numeral 1, inciso a) del RF.

Si bien el sujeto obligado presentó escrito de respuesta, respecto a esta observación no presentó documentación o aclaración alguna.

Del análisis a la documentación presentada en el SIF, se determinó lo siguiente:

No fue localizada evidencia de alguna publicación de carácter teórico y divulgación realizada por el partido, pese a que dicha actividad es una obligación contenida en la Ley General de Partidos Políticos para promover la educación y capacitación política para la participación de los ciudadanos en la vida democrática del país; por tal razón, la observación **no quedó atendida**.

En consecuencia, el sujeto obligado no realizó la edición de por lo menos una publicación semestral de carácter teórico y una trimestral de divulgación, por lo que se considera que ha lugar a dar vista al Organismo Público Local, para que, en ejercicio de sus atribuciones, determine lo conducente.”

2. Excepciones y defensas. Ahora bien, el partido político denunciado, al dar **contestación** al emplazamiento, así como en sus escritos de desahogo al **requerimiento** y de **alegatos**, refirió lo siguiente:

Escritos de contestación y alegatos

- “En el presente caso debe absolver a mi representado, en virtud, de no encontrarse acreditada la acusación manifiesta por el Instituto Nacional Electoral.
- Se niega que no se haya editado y distribuido por lo menos una publicación trimestral de divulgación, y otra semestral de carácter teórico y de formación política, durante el ejercicio 2017, esto es así pues la conducta que mi representado cometió es la de **NO dar aviso** a la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) del INE. Tal como se demuestra con los oficios de respuesta PS/114/2018 y PS/124/2018, en donde no obra aviso alguno a la UTF de la edición y distribución de material editorial.
- De las contestaciones identificadas como PS/114/2018 y PS/124/2018, que obran en el presente expediente, no se presentó aclaración, pues la conducta de la cual versa el presente asunto, **no exige dar aviso**, o somete como obligación de los partidos políticos el **informar** a la autoridad electoral federal sobre dicha situación.

- Ahora bien, para mejor comprensión, la conducta prevista en el artículo 52, fracción X, de la Ley de Partidos Políticos para el Estado de Tlaxcala, a la letra dice:

Artículo 52. Son obligaciones de los partidos políticos:

(...)

X. Editar y distribuir por lo menos una publicación trimestral de divulgación, y otra semestral de carácter teórico y de formación política;

(...)

Transcripción literal, de la cual se puede advertir que **NO existe obligación**, de lo siguiente:

1. **Dar aviso a la Unidad Técnica de Fiscalización.**
2. **Número de ediciones y evidencia de su distribución.**

Ante dicha situación debe **presumirse la inocencia** de mi representado, misma que debe reconocerse en todo procedimiento de cuyo resultado pudiera surgir una pena o sanción, cuya consecuencia procesal, entre otras, es **desplazar la carga de la prueba a la autoridad denunciante...**

- Es importante señalar que de las constancias que remite la Unidad Técnica de Fiscalización, no obra elemento alguno que haga presumir, aun de manera indiciaria, que este instituto político local, no haya dado cumplimiento a lo previsto por el artículo 52, fracción X, de la Ley de Partidos Políticos para el Estado de Tlaxcala.

Toda vez que solo existe la afirmación por parte de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, sobre que este partido político no dio cumplimiento, las documentales en las cuales se aprecia que no se dio aviso, las cuales no se concatenan, sino únicamente con dichos elementos se aprecia que no se dio aviso a la autoridad electoral.

- Aunado a lo anterior, esta Comisión de Quejas y Denuncias, no debe dejar pasar tres criterios importantes que debe contener la vista, denuncia o queja, primero, que los hechos afirmados en la denuncia configuren la violación a la normatividad electoral sancionable a través de este procedimiento; segundo, la denuncia contenga las circunstancias de modo, tiempo y lugar que hagan verosímil la versión de los hechos, esto es, que se proporcionen los elementos indispensables para establecer la posibilidad de que los hechos denunciados hayan ocurrido, tomando en consideración el modo ordinario en que suela dotarse de factibilidad a los hechos y cosas en el medio sociocultural, espacial y temporal que corresponda a los escenarios en que se ubique, y tercero, que se hayan aportado los elementos de prueba suficientes para extraer indicios sobre la credibilidad de los hechos materia de la denuncia o queja...Estos requisitos tienen por finalidad evitar que la investigación, desde su origen, resulte una pesquisa general injustificada, prohibida por la Constitución de la República.
- Ante tal situación, no es dable sancionar a mi representado por la conducta prevista en el artículo 52, fracción X, de la Ley de Partidos Políticos para el Estado de Tlaxcala, al no existir elementos suficientes que hagan presumir aun de manera indiciaria, que la conducta de mi representado se ajuste a lo previsto en el numeral multicitado.

Toda vez que como ha quedado precisado en líneas anteriores, para imponer una sanción es indispensable la certeza de la culpabilidad, ya que si lo que la motiva está en duda de su existencia no hay razón para imponerla.

- *Máxime que la UTF del INE, no acudió a las instalaciones de mi representado a cerciorarse de la omisión a la que hace referencia el artículo 52, fracción X, de la Ley de Partidos Políticos para el Estado de Tlaxcala.*

O que en el expediente obra declaración alguna

- **La documental.** *Consistente en dos materiales editados y distribuidos en este instituto político local, uno de manera trimestral y otro de manera semestral bajo los títulos siguientes:*

- **Política Económica Parte I**
- **Política Económica Parte II**

Los que se sirven para demostrar que este instituto político si se sujetó a lo previsto por el artículo 52, fracción X, de la Ley de Partidos Políticos para el Estado de Tlaxcala

Desahogo de requerimiento

- *Informo a usted respecto al material denominado **Política Económica Parte I y Política Económica Parte II**, se distribuyeron de manera directa con los militantes del partido socialista, durante el año 2017, en diferentes fechas y horas, en las oficinas que ocupa este instituto político, para tal efecto adjunto impresión fotográfica, de dicha entrega.”*

3. Fijación de la Litis.

Por lo expuesto, en el presente asunto se debe dilucidar si el **PS**, incurrió en una transgresión a la normativa electoral local, derivada de “*la omisión de editar y distribuir por lo menos una publicación trimestral de divulgación, y otra semestral de carácter teórico y de formación política*”.

4. Marco normativo.

A efecto de determinar lo conducente respecto a la conducta en estudio, es necesario tener presente el marco jurídico que regula la obligación de los partidos políticos respecto de editar y distribuir por lo menos una publicación trimestral de divulgación, y otra semestral de carácter teórico y de formación política durante el ejercicio de un año calendario. En este sentido, tenemos que:

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala

Artículo 346. Constituyen infracciones de los partidos políticos y coaliciones:

I. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley de Partidos Políticos para el Estado de Tlaxcala, de esta Ley y demás disposiciones aplicables;

Ley de Partidos Políticos para el Estado de Tlaxcala

Artículo 52. Son **obligaciones** de los partidos políticos:

X. Editar y distribuir por lo menos una **publicación** trimestral de **divulgación**, y otra semestral de carácter **teórico y de formación política**;

Artículo 87. Los partidos políticos tendrán derecho al **financiamiento público** para sus actividades, estructura, sueldos y salarios, independientemente de las demás prerrogativas otorgadas en esta Ley, conforme a las **disposiciones siguientes**:

C. Por actividades específicas como entidades de interés público:

I. La educación y capacitación política, investigación socioeconómica y política, así como las **tareas editoriales** de los partidos políticos, serán apoyadas mediante financiamiento público por un monto total anual equivalente al tres por ciento del que corresponda en el mismo año para las actividades ordinarias a que se refiere el apartado A de este artículo; el monto total será distribuido en los términos establecidos en la fracción II del apartado antes citado.

Como se advierte, la legislación aplicable al presente caso establece como obligación de los partidos políticos el editar y distribuir por lo menos una publicación trimestral de divulgación, y otra semestral de carácter teórico y de formación política, con el objeto de que dichos institutos políticos cumplan con su finalidad de **coadyuvar en el desarrollo de la vida democrática**, así como para tener una cultura política mejor informada, razón por la cual el legislador no sólo impuso la obligación de realizar las **publicaciones** mencionadas, sino también determinó dotarlas de **financiamiento público**.

Ahora, si bien es cierto que la ley electoral local no establece puntualmente los requisitos que deben cubrir las **publicaciones** en comento, del contenido del artículo 52, fracción X, de la LPPET, así como de la doctrina jurisdiccional aportada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (**Sala Superior**), es posible obtener algunas características que estas deben cubrir, para tener por cumplida la exigencia legal prevista.

A. En primer término podemos advertir que se trata de una obligación doble:

- a) Editar y distribuir una publicación **trimestral de divulgación**, y
- b) Editar y distribuir una publicación **semestral de carácter teórico y de formación política**.

Es decir, la exigencia en la realización de estas actividades, especificadas en forma diversa por su contenido y periodicidad, deja advertir que se trata necesariamente de **dos publicaciones distintas**, sin posibilidad alguna de conjuntarlas en una sola, pues carecería de razón el que el legislador hubiera precisado la naturaleza y periodicidad de las referidas publicaciones en los términos en que lo hizo.

De esta forma tenemos, que los partidos tienen la obligación de editar, por cuanto hace a las publicaciones de **divulgación**, por lo menos **cuatro** números durante un año calendario, y respecto de las publicaciones de **carácter teórico y de formación política dos**.

En esa lógica, para acreditar el cumplimiento de dicha disposición, los partidos deben proporcionar a la autoridad fiscalizadora, ejemplares de los cuatro números de la publicación de divulgación, y dos de la de carácter teórico, publicados y difundidos en el transcurso del año que corresponda.⁶

B. El carácter de las publicaciones será de divulgación, teórico y de formación política.

Ahora bien, con el propósito de esclarecer qué debe entenderse por publicaciones de divulgación y de carácter teórico, las cuales se encuentran obligados a editar y distribuir los partidos políticos, es necesario precisar que la Sala Superior, ha establecido el contenido y alcances que deben revestir este tipo de ediciones, a saber:

⁶ Así lo sostuvo la Sala Regional Guadalajara al resolver el expediente **SG-RAP-8/2017**.

- a) Una publicación de **divulgación**, es aquella que con independencia de contener breves notas de información, externa la postura del Partido Político respecto de diversos temas de índole político-social.⁷
- b) Por su parte, una publicación que merezca ser calificada de **carácter teórica**, debe tener sustento en una investigación con rigor científico en el tema de que se trate, y ha de estar apoyada no sólo en hechos o apreciaciones de carácter subjetivo de quien lo realice, sino en conceptos doctrinarios básicos que permitan un análisis profundo y objetivo del problema de que se trate, a la par que concluya con la definición de propuestas concretas al caso, y no en una simple opinión, que en razón de quien la externa, venga a constituir solamente una posición que se adopte ante el mismo. En suma, ha de brindar a quien va dirigido, los elementos objetivos necesarios para que pueda, por sí mismo, conocer una determinada problemática, sus dimensiones y repercusiones, de manera tal que le permitan adoptar una posición propia, coincidente o no con la del editor, como la formación de una conciencia crítica, lo que así colmaría los fines de coadyuvar al desarrollo de la cultura política y la creación de una opinión pública mejor informada, razón por la cual el legislador no sólo impuso la obligación de realizar las **publicaciones** mencionadas, sino también determinó dotarlas de financiamiento público.

Todo lo anterior se confirma, con la exigencia que la ley impone de llevar a cabo una publicación **semestral**, que así permita la elaboración de un trabajo que en rigor pueda tener cierto grado de especialización y profundización en cuanto a su contenido, y que constituya un elemento para fortalecer el desarrollo de la cultura política en los ciudadanos.⁸

C. El número de ejemplares que debe editarse.

La obligación de **editar y distribuir** por lo menos una **publicación** trimestral de **divulgación**, y otra semestral de carácter **teórico y de formación política**, tiene su justificante, como ya se razonó, en la obligación inmanente de los partidos políticos de coadyuvar al desarrollo de la vida democrática y de la cultura política, lo cual sólo puede lograrse mediante la distribución de un **número aceptable de ejemplares** respecto de un mismo documento, con el ánimo de llevar al conocimiento general diversas posiciones doctrinales respecto de un problema de diversa índole, bien sea de orden político, jurídico, social, económico, etcétera.

D. El origen y destino de las publicaciones debe acreditarse documentalmente hasta el punto final de su entrega.

Existe la obligación para los partidos políticos, de acreditar documentalmente la edición y distribución de las tareas editoriales, por lo cual, deben llevar un control desde su recepción hasta que salen definitivamente de la organización administrativa partidista, es decir, desde el principio hasta el punto final que tuvieron sus **publicaciones**.

Lo anterior, tomando en cuenta que las tareas editoriales por su propia naturaleza, se dirigen primordialmente a la difusión de la cultura política en el país, con el objeto de beneficiar al

⁷ Así lo sostuvo la Sala Superior al resolver el expediente **SUP-RAP-024/2000**.

⁸ La Sala Superior, determinó los requisitos que deben cubrir las publicaciones con fines teóricas, en el criterio contenido en la Tesis CXXIII/2002, 12 de rubro: **"PUBLICACIÓN DE CARÁCTER TEÓRICO DE LOS PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS. CARACTERÍSTICAS QUE DEBE CONTENER"**.

mayor número de personas, ya sean militantes del propio partido político, afiliados, simpatizantes o ciudadanos en general.

Razón por la cual, si el instituto político no presentara evidencia de la **edición** de dichos materiales, así como su **entrega** en el comité estatal, municipales y/o algún otro órgano equivalente, donde hayan sido distribuidas las **publicaciones**, se le negará la acreditación que pretenda hacer respecto del cumplimiento de esas obligaciones.⁹

ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO

Una vez que se ha precisado el marco jurídico que rige el presente asunto, esta autoridad electoral considera que el procedimiento que aquí se analiza debe declararse **fundado** por las consideraciones que se exponen a continuación.

1. Carga probatoria.

En torno a la infracción atribuida al **PS**, obran en autos las siguientes probanzas:

- a) Oficio **ITE-DPAyF-530-2019 y anexo**, signado por la Titular de la **DPPAyF**, mediante el cual informa que según los datos obtenidos del Programa de Seguimiento a Sanciones y Remanentes del **INE**, la resolución identificada con la clave **INE/CG63/2019**, actualmente se encuentra firme.

Probanza que por tratarse de un documento público adquiere **valor probatorio pleno**, de conformidad con lo previsto por los artículos 369, párrafo segundo de la LIPEET, 22 numeral 1, fracción I, y 27 párrafo 2, del Reglamento de Quejas y Denuncias.

- b) Oficio **INE-UTVOPL/3375/2019**, mediante el cual el Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismo Públicos Locales del **INE**, remite el diverso **INE/UTF/DA/10370/19**, signado por el Encargado de Despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización del **INE**, a través del cual envió un CD óptico certificado de la documentación que se localizó en los archivos del Sistema Integral de Fiscalización, el cual contiene la capeta electrónica: **10_PS_TLX**, y esta a su vez, las **documentales** consistentes en:

- La resolución identificada con la clave **INE/CG63/2019**;
- Oficios de errores y omisiones **INE/UTF/DA/44779/18** e **INE/UTF/DA/47096/2018**;
- Oficios de respuesta **PS/114/2018** y **PS/124/2018**;
- Dictamen consolidado respecto de la revisión del Informe Anual de Ingresos y Gastos que presentó el Partido Socialista, correspondientes al ejercicio 2017, así como,
- Su correspondiente “Balanza catálogos 2017”.

Probanzas que por tratarse de documentos públicos adquieren **valor probatorio pleno**, en términos de lo previsto por los artículos 369, párrafo segundo de la LIPEET, 22 numeral 1, fracción I, y 27 párrafo 2, del Reglamento de Quejas y Denuncias, ya que no se encuentran desvirtuadas respecto de su autenticidad o contenido.

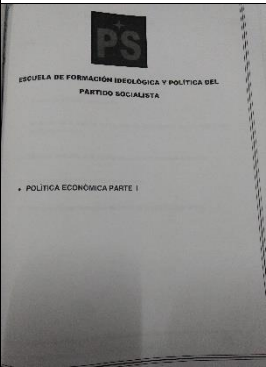
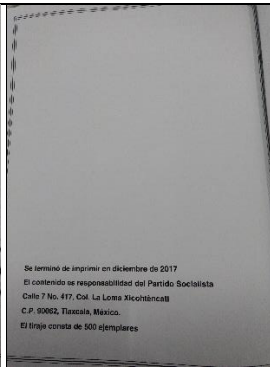
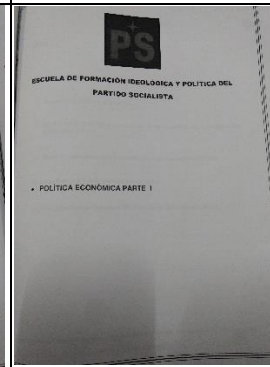
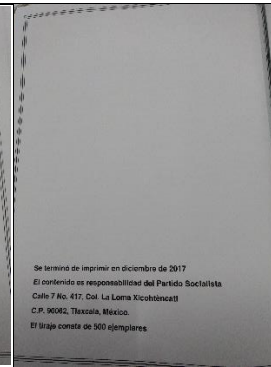
⁹ La Sala Superior, determinó la obligación que tiene por partidos políticos de acreditar documentalmente el origen y destino de las publicaciones correspondientes a tareas editoriales, en el criterio contenido en la **Tesis CLXVIII/2002**, de rubro: **“TAREAS EDITORIALES. EL ORIGEN Y DESTINO DE LAS PUBLICACIONES DEBE ACREDITARSE DOCUMENTALMENTE HASTA EL PUNTO FINAL DE SU ENTREGA”**.

c) Al respecto, cabe precisar que el partido político denunciado, al comparecer al presente procedimiento, aportó como medios probatorios los siguientes:

➤ **“La documental.** Consistente en dos materiales editados y distribuidos en este instituto político local, uno de manera trimestral y otro de manera semestral bajo los títulos siguientes:

- **Política Económica Parte I**
- **Política Económica Parte II”**

Los cuales corresponden a los testigos de las publicaciones teóricas y de difusión que señala fueron editadas y distribuidas por el **PS** en el ejercicio 2017, con las características siguientes¹⁰:

Ejercicio	2017			
Impreso	Diciembre de 2017		Diciembre de 2017	
Ejemplares	500		500	
Imagen				

Asimismo, señaló en su escrito de **desahogo al requerimiento** formulado, lo siguiente:

➤ **“Informo a usted respecto al material denominado *Política Económica Parte I y Política Económica Parte II*, se distribuyeron de manera directa con los militantes del partido socialista, durante el año 2017, en diferentes fechas y horas, en las oficinas que ocupa este instituto político, para tal efecto adjunto impresión fotográfica, de dicha entrega:**



¹⁰ Los datos descritos se desprenden del contenido de los propios ejemplares.

Probanzas que conforme a lo dispuesto por los artículos 369, párrafo tercero de la LIPEET, 22 numeral 1, fracción II, y 27 párrafo 3, del Reglamento Quejas y Denuncias, **carecen de valor probatorio pleno**, y sólo alcanzarán ese grado cuando, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio, generen convicción sobre la veracidad de los hechos a que se refieren.

d) Finalmente, el **PS** señaló en su escrito de **contestación** a la denuncia:

➤ **La documental.** *Consistente en dos materiales editados y distribuidos en este instituto político local, uno de manera trimestral y otro de manera semestral bajo los títulos siguientes:*

- **Política Económica Parte I**
- **Política Económica Parte II**

Los que se sirven para demostrar que este instituto político sí se sujetó a lo previsto por el artículo 52, fracción X, de la Ley de Partidos Políticos para el Estado de Tlaxcala.

Confesión vía escritos que adquiere **valor probatorio pleno**, de conformidad con lo previsto por los artículos 369, párrafo tercero de la LIPEET, 22 párrafo 1, fracción I, 23 numeral 1, y 27 párrafo 2, del Reglamento de Quejas y Denuncias.

2. Hechos acreditados y presunciones.

De la valoración conjunta de las pruebas que obran en autos, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, así como a los principios rectores de la función electoral, se genera convicción en este **CG**, sobre los hechos siguientes:

- a) La resolución identificada con la clave **INE/CG63/2019**, cuya **vista** dio origen al procedimiento sancionador que se resuelve, **actualmente se encuentra firme**.
- b) El **CG** del **INE** dio vista a este Instituto, con motivo de la **omisión** en que incurrió el **PS** de demostrar la **edición y distribución** de por lo menos una **publicación** trimestral de **divulgación**, y otra semestral de carácter **teórico y de formación política**, durante el ejercicio 2017.

Para ello, la autoridad electoral refirió en la resolución **INE/CG63/2019**, relativa a las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos del **PS**, correspondientes al ejercicio 2017, en lo que al presente asunto atañe **Conclusión 10-C2-TL**, que derivado de la solicitud que en su oportunidad le realizó al **PS**, consistente en la aclaración de los errores y omisiones que se determinaron de la revisión de los registros realizados en el SIF, el sujeto obligado *no presentó documentación o aclaración alguna*.

Ante la falta de respuesta del sujeto obligado, y considerando que dicho instituto político no hizo llegar documentación o pruebas adicionales, el **CG** del **INE** determinó calificar el **incumplimiento** de la obligación aludida.

En ese orden, la carencia de registro contable del gasto, genera presunción sobre la omisión de **editar y distribuir** por lo menos una **publicación** trimestral de **divulgación**, y otra semestral de carácter **teórico y de formación política**, en dicho periodo.

- c) El **PS** exhibió ante este Instituto, dos testigos de las publicaciones editadas según su dicho, uno de manera trimestral y otro de manera semestral, bajo los títulos: **Política Económica Parte I y Política Económica Parte II**, distribuidas de manera directa en las oficinas que ocupa ese instituto político, durante diferentes fechas y horas del ejercicio 2017, acompañando al efecto la evidencia fotográfica respectiva.

Con lo cual, pretende demostrar que se sujetó a lo previsto por el artículo 52, fracción X, LPPET.

3. Contestación a los argumentos propuestos.

Una vez precisado lo anterior, resulta pertinente pronunciarse en torno a los argumentos propuestos por el **PS**, en sus escritos de contestación a denuncia, desahogo de requerimiento y alegatos, los cuales consisten en que:

- a) La vista, denuncia o queja propuesta debe cumplir determinados requisitos, con la finalidad evitar una **investigación injustificada**, los cuales consisten en:
- Primero, que los hechos afirmados en la denuncia configuren la violación a la normatividad electoral sancionable a través de este procedimiento;
 - Segundo, que la denuncia contenga las circunstancias de modo, tiempo y lugar que hagan verosímil la versión de los hechos, esto es, que se proporcionen los elementos indispensables para establecer la posibilidad de que los hechos denunciados hayan ocurrido; y,
 - Tercero, que se hayan aportado los elementos de prueba suficientes para extraer indicios sobre la credibilidad de los hechos materia de la denuncia o queja.

Respecto al planteamiento en estudio, debe decirse que se trata del análisis preliminar que realiza la **CQyD**, al dar inicio a los procedimientos administrativos sancionadores. En el caso concreto, los extremos propuestos por el denunciado quedaron colmados con las documentales que obraban en autos desde un inicio, consistentes en:

- La resolución identificada con la clave **INE/CG63/2019**;
- Oficios de errores y omisiones INE/UTF/DA/44779/18 e INE/UTF/DA/47096/2018;
- Oficios de respuesta PS/114/2018 y PS/124/2018;
- Dictamen consolidado respecto de la revisión del Informe Anual de Ingresos y Gastos que presentó el Partido Socialista, correspondientes al ejercicio 2017, así como,
- Su correspondiente “Balanza catálogos 2017”.

De las cuales se desprendió la existencia de indicios suficientes para presumir la probable transgresión a la normativa electoral, por parte del **PS**, consistente en *“la omisión de editar y*

*distribuir por lo menos una publicación trimestral de divulgación, y otra semestral de carácter teórico y de formación política, durante el ejercicio 2017”, de conformidad con lo previsto por el Artículo 52, fracción X, de la LPPET, razón por la cual se **justificó de manera plena, el inicio del procedimiento oficioso** que ahora se resuelve.*

- b) Se debe absolver al denunciado, en virtud de no encontrarse acreditada la conducta atribuida, consistente en la omisión de editar y distribuir por lo menos una publicación trimestral de divulgación, y otra semestral de carácter teórico y de formación política, en todo caso, la conducta que se realizó consistió en NO dar aviso sus publicaciones a la **UTF del INE**.

Esto es así, ya que de las contestaciones identificadas como PS/114/2018 y PS/124/2018, se advierte que no se presentó aclaración alguna, pues la obligación sobre la que versa el presente asunto, no exige dar aviso o informar a la autoridad electoral federal respecto de su cumplimiento, ni el número de ediciones y evidencia de su distribución.

Con relación al argumento propuesto por el denunciado, resulta procedente declararlo **ineficaz** para los fines que pretende; es decir, para absolver al denunciado en el procedimiento administrativo que se resuelve.

Esto es así, en razón de que si bien es cierto el Artículo 52, fracción X, de la LPPET, no exige dar aviso o informar a la autoridad electoral federal respecto de su cumplimiento, también lo es que tal y como quedó precisado en la resolución **INE/CG63/2019**, se trata de una obligación derivada de una norma local, por lo cual, ante la falta de aviso o aclaración alguna respecto cumplimiento, se actualiza la posibilidad de dar vista al Organismo Público Local, para que, en ejercicio de sus atribuciones determine lo conducente, como en el caso acontece.

En todo caso, la acreditación de la conducta atribuida, consistente en la omisión de editar y distribuir por lo menos una publicación trimestral de divulgación, y otra semestral de carácter teórico y de formación política, constituye la materia a resolver en el presente asunto, en atención a los medios de prueba que obran en autos, y aquellos aportados por el denunciado al respecto, lo cual se analizará en los apartados subsecuentes.

De igual manera, resulta **desacertada** la afirmación formulada por el denunciado, en torno a que el dispositivo legal en comento, no establece el número de ediciones que este debe realizar, ni la necesidad de generar evidencia de su distribución.

Esto es así, pues tal y como se dejó precisado en el marco normativo de la presente ejecutoria, si bien es cierto que la ley electoral local no establece puntualmente los requisitos que deben cubrir las **publicaciones** en comento, del contenido del artículo 52, fracción X, de la LPPET, así como de la doctrina jurisprudencial aportada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es posible obtener algunas características que estas deben cubrir, para tener por cumplida la exigencia legal prevista.

En primer término resulta pertinente señalar que la obligación de **editar y distribuir** por lo menos una **publicación** trimestral de **divulgación**, y otra semestral de carácter **teórico y de formación política**, tiene su justificante, en la obligación inmanente de las agrupaciones

políticas de coadyuvar al desarrollo de la vida democrática y de la cultura política, lo cual sólo puede lograrse mediante la distribución de un **número aceptable de ejemplares** respecto de un mismo documento, con el ánimo de llevar al conocimiento general diversas posiciones doctrinales respecto de un problema de diversa índole, bien sea de orden político, jurídico, social, económico, etcétera. Asimismo, el **origen y destino de las publicaciones** debe acreditarse documentalmente hasta el punto final de su entrega, por lo cual, distinto a lo expuesto por el denunciado, sí resulta necesario generar evidencia de su distribución al público en general. De ahí lo **desacertado e ineficaz** del argumento propuesto.

- c) Es importante señalar que de las constancias que remite la **UTF**, no obra elemento alguno que haga presumir, aun de manera indiciaria, que ese instituto político local, haya omitido dar cumplimiento a lo previsto por el artículo 52, fracción X, de la LPPET, toda vez que solo existe la afirmación de la autoridad fiscalizadora quien nunca acudió a las instalaciones del **PS** a cerciorarse de la omisión atribuida.

En ese sentido, toda vez que para imponer una sanción es indispensable la certeza de la culpabilidad, según el principio de presunción de inocencia el cual desplaza la carga de la prueba a la autoridad denunciante, resulta claro que no es dable sancionar al denunciado, al no existir elementos suficientes que hagan presumir aun de manera indiciaria, que la conducta se ajuste a lo previsto en el numeral citado.

Respecto al presente argumento es pertinente señalar, que tal y como se dejó precisado en el apartado de **hechos acreditados y presunciones** de la presente resolución, de la valoración conjunta de las pruebas que obran en autos, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, así como a los principios rectores de la función electoral, ante la carencia de registro contable del gasto, así como, la falta de respuesta o aclaración alguna del sujeto obligado dentro del procedimiento de revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de los partidos políticos locales, correspondientes al ejercicio dos mil diecisiete, da lugar a la **presunción** sobre la omisión de **editar y distribuir** por lo menos una **publicación** trimestral de **divulgación**, y otra semestral de carácter **teórico y de formación política**, en dicho periodo.

Por lo cual, distinto a lo expuesto por el denunciado, en autos **sí existen elementos** suficientes para **presumir** la comisión de la conducta atribuida, no obstante, su acreditación se determinará en el siguiente apartado, en atención a los medios de prueba que obran en autos, y aquellos aportados por el denunciado al respecto.

- d) En todo caso, se niega que no se haya editado y distribuido por lo menos una publicación trimestral de divulgación, y otra semestral de carácter teórico y de formación política, durante el ejercicio 2017.

Al efecto, acompaña dos testigos de las publicaciones editadas uno de manera trimestral y otro de manera semestral, bajo los títulos: Política Económica Parte I y Política Económica Parte II, distribuidas de manera directa en las oficinas que ocupa ese instituto político, durante diferentes fechas y horas del ejercicio 2017, según se advierte de la evidencia fotográfica que se incluye.

Probanzas que según su dicho, sirven para demostrar que ese instituto político sí se sujetó a lo previsto por el artículo 52, fracción X, de la LPPET.

Al respecto, es importante señalar que tal y como se dejó precisado en el marco normativo de la presente resolución, las **publicaciones** previstas en el artículo 52, fracción X, de la LPPET, deben cubrir algunas características específicas, para tener por cumplida la exigencia legal prevista.

A. En primer término podemos advertir que se trata de una obligación doble:

- a) Editar y distribuir una publicación **trimestral de divulgación**, y
- b) Editar y distribuir una publicación **semestral de carácter teórico y de formación política**.

Es decir, la exigencia en la realización de estas actividades, especificadas en forma diversa por su contenido y periodicidad, deja advertir que se trata necesariamente de **dos publicaciones distintas, sin posibilidad alguna de conjuntarlas en una sola**, pues carecería de razón el que el legislador hubiera precisado la naturaleza y periodicidad de las referidas publicaciones en los términos en que lo hizo.

De esta forma tenemos, que los partidos tienen la obligación de editar, por cuanto hace a las publicaciones de **divulgación**, por lo menos **cuatro** números durante un año calendario, y respecto de las publicaciones de **carácter teórico y de formación política dos**.

En esa lógica, para acreditar el cumplimiento de dicha disposición, los partidos deben proporcionar a la autoridad fiscalizadora, ejemplares de los **cuatro números de la publicación de divulgación trimestral**, y **dos de la de carácter teórico**, publicados y difundidos en el **transcurso del año que corresponda**.

En el caso concreto, se advierte que el **PS** únicamente acompañó a su escrito de contestación al emplazamiento, **dos testigos** de las ediciones de **carácter teórico y de formación política** denominados **Política Económica Parte I y Política Económica Parte II**, publicados y difundidos según su dicho en el transcurso del año 2017, sin embargo, del contenido de las publicaciones en comento, es posible advertir que estas fueron impresas en diciembre de 2017, por lo cual, en el mejor de los casos su distribución se realizó **en ese mes, y no durante el transcurso del año**, por lo que se **incumplió** con la finalidad perseguida, es decir, coadyuvar al desarrollo de la cultura política y la creación de una opinión pública mejor informada en el **transcurso del año que corresponda**.

Asimismo, fue omiso en exhibir **cuatro números de la publicación de divulgación trimestral**, publicados y difundidos en el mismo ejercicio.

B. El carácter de las publicaciones será de divulgación, teórico y de formación política.

Del análisis de los ejemplares en comento, es posible advertir que cumplen con el requisito de ser publicaciones de **carácter teórico y de formación política**, pues además de ser editados por la **“Escuela de Formación Ideológica y Política del Partido Socialista”**, se trata de investigaciones con rigor científico en el tema de que se trata, y se encuentran apoyadas no sólo en hechos o apreciaciones de carácter subjetivo de quien las realizó, sino en conceptos doctrinarios básicos que permiten un análisis profundo y objetivo del problema propuesto, a la par que concluyen con la definición de propuestas concretas al caso, y no en una simple posición u opinión del mismo.

Sin embargo, ninguna de esas publicaciones puede ser calificada de **divulgación**, pues estas con independencia de contener breves notas de información, externalizan la postura de la agrupación respecto de diversos temas de índole político-social.

De esta forma, en cuanto a esta característica se refiere, tampoco se podría tener por cumplida la obligación a cargo del **PS**, de editar y distribuir por lo menos una publicación de **divulgación trimestral**.

C. El número, origen y destino de las publicaciones debe acreditarse documentalmentehasta el punto final de su entrega.

La obligación de **editar y distribuir** por lo menos una **publicación** trimestral de **divulgación**, y otra semestral de carácter **teórico y de formación política**, tiene su justificante, como ya se razonó, en la obligación inmanente de las agrupaciones políticas de coadyuvar al desarrollo de la vida democrática y de la cultura política, lo cual sólo puede lograrse mediante la distribución de un **número aceptable de ejemplares** respecto de un mismo documento, con el ánimo de llevar al conocimiento general diversas posiciones doctrinales respecto de un problema de diversa índole, bien sea de orden político, jurídico, social, económico, etcétera.

Al respecto, existe también la obligación para los partidos políticos, de acreditar documentalmentela **edición y distribución** de esas tareas editoriales, por lo cual, deben llevar un control desde su recepción hasta que salen definitivamente de la organización administrativa partidista, es decir, desde el principio hasta el punto final que tuvieron sus **publicaciones**.

Lo anterior, tomando en cuenta que las tareas editoriales por su propia naturaleza, se dirigen primordialmente a la difusión de la cultura política en el país, con el objeto de beneficiar al mayor número de personas, ya sean militantes del propio partido político, afiliados, simpatizantes o ciudadanos en general.

Razón por la cual, si el instituto político no presentara evidencia de la **edición** de dichos materiales, así como su **entrega** en el comité estatal, municipales y/o algún otro órgano equivalente, donde hayan sido distribuidas las **publicaciones**, se le negará la acreditación que pretenda hacer respecto del cumplimiento de esas obligaciones.

En ese orden, derivado la **carencia de registro contable del gasto** por parte del **PS**, existe **presunción** sobre la omisión de **editar y distribuir** por lo menos una **publicación** trimestral de **divulgación**, y otra semestral de carácter **teórico y de formación política** en el ejercicio 2017, por lo cual, compete al partido político denunciado acreditar **documentalmente** la edición y distribución de los ejemplares en comento.

Ahora bien, con el material probatorio que obra en autos, no es posible acreditar la **edición y distribución** de por lo menos una **publicación trimestral de divulgación**.

En tanto, que si bien respecto de la publicación **semestral** de carácter **teórico y de formación política**, el **PS** exhibió **dos testigos** de las ediciones denominadas **Política Económica Parte I y Política Económica Parte II**, con un **tiraje** de 500 ejemplares cada uno, la realidad es dichos documentos por sí mismos no acreditan su edición y distribución en la **temporalidad** que refiere; es decir, en diferentes fechas y horas del ejercicio 2017.

Esto es así, pues como se señaló con anterioridad de los **testigos** de las publicaciones denominadas **Política Económica Parte I y Política Económica Parte II**, es posible advertir que estas fueron impresas en **diciembre de 2017**, por lo cual, en el mejor de los casos su distribución se realizó **en ese mes, y no durante el transcurso del año**, por lo que se **incumplió** con la finalidad perseguida, es decir, coadyuvar al desarrollo de la cultura política y la creación de una opinión pública mejor informada en el **transcurso del año que corresponda**.

En consecuencia, ante la carencia de mayores elementos documentales aportados por el denunciado, que permitan acreditar la **edición y distribución** de sus tareas editoriales, en la **temporalidad prevista**, resulta procedente **negar** la acreditación que el **PS** pretende hacer respecto del cumplimiento de esas obligaciones.

En suma, tomando en consideración las constancias que obran en el expediente en que se actúa, se advierte que el **PS no acreditó el cumplimiento** de la obligación contenida en el artículo 52, fracción X, de la LPPET; es decir, editar y distribuir por lo menos una publicación trimestral de divulgación, y otra semestral de carácter teórico y de formación política; en consecuencia, se tiene por acreditada la *omisión* atribuida.

Bajo este orden de ideas, este órgano colegiado considera que, como se había adelantado, el procedimiento que se resuelve debe declararse **fundado**.

TERCERO. CALIFICACIÓN DE LA FALTA E INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.

Una vez que ha quedado demostrada plenamente la comisión de la infracción denunciada y la responsabilidad del **PS**, se procede a determinar la sanción correspondiente, tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 363 de la LIPEET, relativo a la gravedad de la responsabilidad en que se incurra en atención al bien jurídico tutelado por las normas transgredidas; las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción; las condiciones socioeconómicas del infractor; las condiciones externas y los medios de ejecución de la falta; y, en su caso, la reincidencia y el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado de la infracción.

Al respecto, el artículo 358 párrafo I de la LIPEET, establece las sanciones aplicables a los partidos políticos, consistentes en amonestación pública, multa, y en su caso, con la cancelación de su registro como partido político.

I. Calificación de la falta.

Así, esta autoridad electoral para calificar debidamente la falta, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 51, párrafo 1, fracción V del Reglamento de Quejas y Denuncias, debe atender los criterios siguientes:

- a.** Tipo de infracción;
- b.** Bien jurídico tutelado;
- c.** Singularidad o pluralidad de la conducta;
- d.** Circunstancias de tiempo, modo y lugar;
- e.** Las condiciones socioeconómicas del infractor;
- f.** La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones;
- g.** Monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del incumplimiento de obligaciones.

En el caso concreto se presentan las siguientes particularidades.

a. Tipo de infracción.

Tipo de infracción	Descripción de la conducta	Disposiciones jurídicas infringidas
Legal. En razón de que se trata de la vulneración de un precepto de la LPPET.	El incumplimiento a la obligación de editar y distribuir por lo menos una publicación trimestral de divulgación, y otra semestral de carácter teórico y de formación política, en el ejercicio 2017.	Artículo 52, fracción X, de la LPPET.

b. El bien jurídico tutelado (trascendencia de las normas transgredidas).

La disposición aludida en el apartado anterior, tienden a hacer efectivo que los partidos políticos cumplan con la función de contribuir en la formación de una opinión pública mejor informada y el fomento a la cultura democrática.

En el caso, tal dispositivo se conculcó con el actuar del **PS**, derivado del incumplimiento de la obligación de **editar y distribuir** por lo menos una publicación trimestral de divulgación, y otra semestral de carácter teórico y de formación política, por ello, se procede a imponer la sanción correspondiente.

c. La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.

Al respecto, cabe señalar que al haberse acreditado la infracción a lo dispuesto en el artículo 52, fracción X, de la LPPET, por parte del **PS**, consistente en el incumplimiento de la obligación de **editar y distribuir** por lo menos una publicación trimestral de divulgación, y otra semestral de carácter teórico y de formación política, se estima que en el presente asunto se actualiza una sola infracción, es decir, solo se colma un supuesto jurídico.

d. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción.

Ahora bien, para llevar a cabo la individualización de la sanción, la conducta debe valorarse conjuntamente con las circunstancias objetivas que concurren en el caso, como son:

- 1. Modo.** En el caso a estudio, lo es el incumplimiento de la obligación de **editar y distribuir** por lo menos una publicación trimestral de divulgación, y otra semestral de carácter teórico y de formación política, por parte del **PS**.
- 2. Tiempo.** De conformidad con las constancias que obran en autos, esta autoridad tiene por acreditado el incumplimiento por parte del **PS**, de la multicitada obligación **durante el ejercicio 2017**.
- 3. Lugar.** La falta atribuida al partido político fue cometida en el estado de Tlaxcala, dado que se trata de una norma aplicable a ese ámbito geográfico.

e. Las condiciones socioeconómicas del infractor.

Conforme al Acuerdo ITE-CG 01/2020, aprobado por este **CG** el quince de enero de dos mil veinte, se estableció que, entre otros, el **PS** recibiría mensualmente en el presente ejercicio, por concepto de financiamiento público para sus actividades ordinarias y específicas permanentes, la siguiente cantidad:

Periodo	Monto del financiamiento público mensual para el sostenimiento de actividades ordinarias y específicas de 2020
Enero-Junio	\$89,318.09
Julio-Diciembre	\$89,025.57

Sin embargo, derivado de las diversas sanciones que le han sido impuestas, actualmente el **PS** tiene un monto a saldar por la cantidad de **\$219,310.09** (Doscientos diecinueve mil trescientos diez pesos 09/100 M.N.), lo que genera que se vea reducida su capacidad económica, según se desprende del siguiente tabulado:

ID	Partido Político	Resolución de la Autoridad	Resolución INE	Monto total de la sanción	Montos de deducciones realizadas al mes de FEBRERO 2020	Montos por saldar	Total
10	Partido Socialista	ITE-CG32/2019	INE/CG63/2019 INE/CG274/2019	\$73,073.19	\$73,073.19	\$0.00	\$219,310.09
		ITE-CG04/2020	INE/CG472/2019	\$162,797.14	\$10,238.21	\$152,558.93	
		ITE-CG04/2020	INE/CG546/2019	\$66,751.16	\$0.00	\$66,751.16	

f. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones.

Por cuanto hace a la reincidencia en que pudiera haber incurrido el **PS**, este organismo público electoral local considera que no se actualiza.

En efecto, de conformidad con el párrafo segundo del artículo 363, de la LIPEET, se considerará reincidente al infractor que habiendo sido declarado responsable del incumplimiento a alguna de las obligaciones a que se refiere la señala Ley, incurra nuevamente en la misma conducta infractora.

Al respecto, la Sala Superior ha establecido que los elementos mínimos que se deben tomar en cuenta a fin de tener por actualizada la reincidencia, como agravante de una sanción en el procedimiento administrativo sancionador, son:

1. Que el infractor haya cometido con anterioridad una infracción (repetición de la falta);
2. Que la infracción sea de la misma naturaleza a la anterior, lo que supone que ambas protegen el mismo bien jurídico; y,
3. Que en ejercicios anteriores el infractor haya sido sancionado por esa infracción mediante resolución o sentencia firme.

Lo anterior se desprende del criterio sostenido por la Sala Superior, a través de la Tesis de Jurisprudencia 41/2010, de rubro: ***“REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN”***¹¹.

¹¹ Consultable en

<https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=41/2010&tpoBusqueda=S&sWord=REINCIDENCIA.,ELEMENTOS>

En este sentido, debe precisarse que en el presente asunto, no puede considerarse actualizado dicho supuesto, pues en los archivos de este Instituto, no obra alguna resolución en la que se haya sancionado al **PS** por faltas como la que se sanciona por esta vía, **que se hayan dictado con anterioridad a los hechos materia del presente asunto.**

g. Monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del incumplimiento de obligaciones.

Al respecto, se estima que la omisión en que ha incurrido el **PS**, causó un perjuicio al objetivo buscado por el legislador, consistente en que los partidos políticos cumplan con la función de contribuir en la formación de una opinión pública mejor informada y el fomento a la cultura democrática.

No obstante, del análisis realizado a las constancias que integran el presente expediente, se advierte que el **PS no** obtuvo algún lucro o beneficio derivado de la conducta infractora.

II. Individualización de la sanción.

Una vez sentadas las anteriores consideraciones, y a efecto de individualizar apropiadamente la sanción, se procede a tomar en cuenta los siguientes elementos:

- a) Calificación de la gravedad de la infracción en que se incurra;
- b) Sanción a imponer;
- c) Impacto en las actividades del infractor;
- d) Condiciones externas y medios de ejecución.

a) La calificación de la gravedad de la infracción en que se incurra.

En el presente caso, atendiendo a los elementos objetivos anteriormente precisados, la conducta desplegada por el **PS**, debe calificarse con una **gravedad leve**, ya que si bien con su omisión infringió los objetivos buscados por el legislador, consistente en que los partidos políticos cumplan con la función de contribuir en la formación de una opinión pública mejor informada y el fomento a la cultura democrática, lo cierto es que la conducta realizada por el denunciado **no afectó de manera grave** el buen funcionamiento del sistema electoral en nuestro país.

Asimismo, es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en cada caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de modo, tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias, de tal forma que sea necesario tener también en consideración tales elementos para que la individualización de la sanción sea adecuada.

En este sentido, para la graduación de la falta, se han tomado en cuenta las siguientes circunstancias:

1. Quedó acreditada la infracción a lo dispuesto en el artículo 52, fracción X, de la LPPET, por parte del **PS**, consistente en el incumplimiento de la obligación de **editar y distribuir** por lo menos una publicación trimestral de divulgación, y otra semestral de carácter teórico y de formación política.
2. El bien jurídico tutelado por las normas transgredidas es garantizar que los partidos políticos cumplan con la función de contribuir en la formación de una opinión pública mejor informada y el fomento a la cultura democrática.
3. No existió un beneficio por parte del **PS**, o lucro ilegalmente logrado, con motivo de la irregularidad observada.
4. No existió una vulneración reiterada de la normativa electoral o reincidencia por parte del **PS**.
5. No implicó una pluralidad de infracciones o faltas administrativas, toda vez que se configuró una sola conducta infractora.
6. No se afectó en forma sustancial el buen funcionamiento del sistema electoral en nuestro país.

b) Sanción a imponer.

El catálogo de sanciones susceptibles de imponer a los partidos políticos se encuentra previsto en el artículo 358, fracción I, de la LIPEET; del tenor siguiente:

“Artículo 358. Las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán sancionadas conforme a lo siguiente:

I. Respecto de los partidos políticos:

- a) Con amonestación pública.*
- b) Con multa de cien a diez mil días de salario mínimo general vigente en el Estado, según la gravedad de la falta, o el doble en caso de reincidencia.*
- c) Independientemente de otras sanciones, en los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de precampaña y campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso, sin embargo, la multa no podrá ser menor a quinientos días de salario mínimo general vigente en el Estado. En caso de reincidencia, la sanción será del doble de lo anterior.*
- d) Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, o con la supresión total de las ministraciones del financiamiento público que le corresponda, por el periodo que determine la resolución correspondiente.*
- e) Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, en violación de las disposiciones legales.*
- f) En caso de conductas graves y reiteradas, a criterio del Instituto, que violen la Constitución, esta Ley, la Ley de Partidos Políticos para el Estado de Tlaxcala, y demás ordenamientos legales aplicables, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.”*

Ahora bien, para determinar la sanción a imponer al **PS**; debe tenerse presente que la LIPEET confiere a la autoridad administrativa electoral, arbitrio para elegir, dentro del catálogo de correctivos aplicables, aquél que se ajuste a la conducta desplegada por el sujeto infractor, y

que a su vez, sea bastante y suficiente para prevenir que cualquier otra persona (en la especie, partidos políticos), realice una falta similar.

De esta manera, analizados los elementos referidos en el presente considerando, esta autoridad electoral estima que de las sanciones relacionadas deberá imponerse la prevista en el artículo 358, fracción I, inciso a) de la LIPEET, consistente en **AMONESTACIÓN PÚBLICA**, ya que resulta adecuada para castigar la conducta que nos ocupa, pues sin ser gravosa, puede inhibir al partido político denunciado, para que en el futuro vigile el cumplimiento de las normas de la materia, además de encontrarse conforme al parámetro que esta autoridad estima aplicable en casos de conductas de **gravedad leve**.

c) Impacto en las actividades del sujeto infractor.

Al respecto y toda vez que en el presente asunto la sanción que se determina consiste en una amonestación pública, tal situación de forma alguna merma el patrimonio del **PS**, por ende, en modo alguno afecta el cumplimiento de sus fines.

d) Condiciones externas y medios de ejecución.

En este apartado, resulta atinente precisar que la conducta desplegada por el **PS**, consiste en una omisión consumada durante el ejercicio 2017, y dado que se trata de una omisión no aplica lo relativo a medios de ejecución.

En tal virtud, toda vez que la finalidad del legislador es garantizar el cumplimiento de los preceptos contenidos en la normatividad electoral, lo procedente es tener por **acreditada** la conducta atribuida al partido político denunciado.

Por lo expuesto y fundado, se emite la siguiente:

RESOLUCIÓN

PRIMERO. Este Consejo General, es **competente** para emitir la presente resolución, en términos del considerando PRIMERO.

SEGUNDO. Se declara **fundado** el procedimiento ordinario sancionador iniciado en contra del **Partido Socialista**, por infracción a lo dispuesto en el artículo 52, fracción X, de la Ley de Partidos Políticos para el Estado de Tlaxcala, en términos de lo expuesto en el Considerando SEGUNDO, de la presente Resolución.

TERCERO. Se **impone** al **Partido Socialista** una sanción consistente en **amonestación pública**, atendiendo las razones expuestas en el considerando TERCERO.

CUARTO. Notifíquese personalmente al **Partido Socialista**, por conducto de sus representantes ante este Consejo General.

QUINTO. Publíquese la presente resolución en los estrados y en la página de internet del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, así como en el Catálogo de Sujetos Sancionados en los Procedimientos Ordinarios Sancionadores.

En su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Así lo aprobaron por unanimidad de votos las y los Consejeros Electorales integrantes del Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, en Sesión Pública Ordinaria de fecha veintisiete de febrero de dos mil veinte, firmando al calce la Consejera Presidenta y el Secretario del Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, con fundamento en el artículo 72 fracciones I, II y VIII de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala. Doy fe.

Mtra. Elizabeth Piedras Martínez
Consejera Presidenta del
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

Lic. Germán Mendoza Papalotzi
Secretario del Consejo General del
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones